

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	MARÍA ROCÍO RESTREPO ARANGO
DEMANDADO	COLPENSIONES
RADICADO	05001-31-05-023-2018-00538-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Reliquidación Pensional por Monto (como beneficiaria del régimen de transición pensional)
DECISIÓN	Modifica y Confirma

Medellín, dieciséis (16) de julio de dos mil veintiunos (2021)

Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual

Esta Sala asume la competencia en esta instancia, conforme a la regulación establecida por el Gobierno Nacional en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 *“por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*; en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de Junio de 2020 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

En consecuencia, este asunto se tramita conforme al procedimiento de sentencia escrita en segunda instancia, y cumplido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro

del presente proceso, promovido por la señora **MARÍA ROCÍO RESTREPO ARANGO** en contra de **COLPENSIONES**.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 035**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ASUNTO

Es materia de la Litis, decidir el recurso de apelación que formuló la apoderada judicial de Colpensiones, contra la sentencia que profirió el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública celebrada el día 7 de febrero de 2020, y a su vez conocer dicha sentencia en grado jurisdiccional de Consulta, en lo a que la condena a la entidad pública demandada se refiere, de conformidad al artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que la señora **MARÍA ROCÍO RESTREPO ARANGO** nació el 13 de junio de 1948, por lo que contaba a 1º de abril de 1994 con más de 35 años de edad. Adujo que, pese al derecho a la transición, Colpensiones le reconoció la pensión de vejez desde el 1º de septiembre de 2003 cuando tenía la edad y las semanas cotizadas (1,625 en total), pero aplicando el monto del 85% conforme al artículo 10 de la Ley 797 de 2003, a través de la Resolución Nro. 009299 de 2003, y desconociendo que a la actora le asistía derecho al monto del 90% en aplicación del Decreto 758 de 1990.

De otro lado, manifestó que tiene por cónyuge al señor **JUAN CARLOS DUQUE ARANGO**, con quien se encuentra casada desde hace más de 23 años, quien no trabaja, y depende económicamente de la pensionada en un todo y por todo.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial esta dirigida a que se declare, que la demandante es beneficiaria del régimen de transición pensional del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, asistiéndole derecho a que el monto de su pensión sea del 90% conforme al artículo 20 del Decreto 758 de 1990, y que le asiste derecho al pago del incremento pensional del 14% sobre la pensión de salario mínimo, por tener a cargo a su cónyuge. En consecuencia, que se condene a Colpensiones a reconocer y pagarle retroactivamente el reajuste pensional y los incrementos pensionales en un 14% sobre una pensión de salario mínimo; la indexación de las sumas objeto de condena y las costas procesales.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

La demanda fue admitida y notificada a la entidad demandada, quien mediante escrito visible a folios 36 y siguientes del expediente, aceptando el status de pensionada de la actora, el número de semanas cotizadas , el monto aplicado con base a la Ley 797 de 2003 y la reclamación administrativa presentada, negando los demás hechos; y, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, formulando las excepciones perentorias que denominó *“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS, PRESCRIPCIÓN, COMPENSACIÓN y la EXCEPCIÓN INNOMINADA”*.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En audiencia pública celebrada el 7 de febrero de 2020, el Juez de conocimiento, condenó a la reliquidación pensional por monto, accediendo a reconocer a la demandante una tasa de reemplazo del 90% como beneficiaria del régimen de transición pensional, y; absolvió de los incrementos pensionales.

Si bien la actora es pensionada desde septiembre de 2003, la reliquidación la reconoció de manera retroactiva desde el 15 de agosto de 2015, esto es, tres años con anterioridad a la reclamación administrativa, teniendo en cuenta que, entre la presentación de esta y la radicación de la demanda en la

oficina de apoyo judicial no alcanzaron a transcurrir más de tres años, por lo que declaró probada la excepción de prescripción propuesta, para todas aquellas sumas causadas con anterioridad al 15 de agosto de 2015.

Reconoció a título de reliquidación pensional por monto un retroactivo por valor de \$2.568.204, comprendido entre el 15 de agosto de 2015 y el 29 de febrero de 2020, e impuso a la entidad demandada la obligación de continuar pagando una mesada pensional en favor de la actora, por valor de \$806.192 desde marzo de 2020 y en lo sucesivo, sin perjuicio de los incrementos pensionales anuales.

Los argumentos para absolver por los incrementos pensionales se apoyaron en la sentencia de la Corte Constitucional SU-140 de 2019, que estableció que para los beneficiarios del Decreto 758 de 1990 por transición y no por derecho propio, no había lugar a reconocer los incrementos pensionales del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, ya que los mismos habían sido derogados orgánicamente con la promulgación de la Ley 100 de 1993, a partir del 1º de abril de 1994.

Le impuso condena en costas procesales a Colpensiones, en favor de la demandante.

VI. – RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la apoderada judicial de COLPENSIONES, quien apeló la condena impuesta a Colpensiones por reliquidación respecto del monto. Sustentó la alzada afirmando que la entidad realizó el estudio del monto de la demandante, y resolvió no acceder a su reconocimiento, al considerar que a la demandante le resulta más favorable la Ley 797 de 2003, normativa que le permitió acceder a una tasa de reemplazo del 85%, que el propio Acuerdo 049 de 1990.

Con fundamento en estos argumentos solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia.

Alegatos de conclusión:

En la oportunidad procesal, la Dra. Mirenyu Manrique Arango, con T.P. Nro. 188.625 del CSJ., presentó alegatos de conclusión como apoderada judicial de COLPENSIONES. Esta sala le reconoce personería jurídica amplia y suficiente, conforme a la documentación allegada, que la acredita como apoderada judicial sustituta para representar los intereses de Colpensiones.

A través de dichos alegatos, reiteró los planteamientos hechos en la alzada, en cuanto a que, a la demandante le resulta más favorable el monto de la Ley 797 de 2003 que el del Decreto 758 de 1990, por lo que solicitó sea revocada la reliquidación reconocida en primera instancia.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, pasa la Sala a resolver de fondo, previas las siguientes

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica procesal, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Naturaleza jurídica de la pretensión.- Reliquidación pensional por Monto, como beneficiaria del Régimen de Transición Pensional (Artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y 20 del Decreto 758 de 1990).

El objeto central de esta Litis, se extiende a los puntos objeto de inconformismo planteados por la apoderada judicial de Colpensiones en el recurso de alzada, lo que comprende determinar, si la demandante, como beneficiaria del régimen de transición pensional, le asiste derecho al reconocimiento de una tasa de reemplazo del 90%, en aplicación del Decreto 758 de 1990.

Esta sala, además de resolver ese punto, revisará todos los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoyó el A quo para condenar a la entidad demandada, por virtud de las amplias facultades de que se dispone en grado jurisdiccional de consulta.

Condiciones para ser beneficiario del régimen de transición pensional:

El régimen de transición pensional es una figura jurídica creada por el legislador para proteger los intereses, derechos y beneficios de las personas que estaban próximas a pensionarse a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones creado por la Ley 100 de 1993, buscando mantenerles las condiciones de su régimen inicial en algunos tópicos (edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y monto), frente a las exigencias uniformes que introdujo el Legislador al promulgar el sistema pensional contenido en la Ley 100 de 1993.

Así lo dispuso el artículo 36 de la citada Ley, enfocando el beneficio normativo a los trabajadores, que a la fecha de entrada en vigencia del SGP, que para el sector privado fue el 1° de abril de 1994, cumplieren una de las siguientes condiciones: Mujeres con treinta y cinco (35) o más años de edad; hombres con cuarenta (40) o más años de edad, hombres y mujeres que, independientemente de la edad, acrediten quince (15) años o más de servicios cotizados a esa fecha concreta, conforme lo señala el artículo 151 de la Ley 100 de 1993.

Ahora bien, se debe tener en cuenta además, la reforma que al artículo 48 de la Constitución Política de 1991, le introdujere el Acto Legislativo 01 de 2005, en su artículo 1° párrafo transitorio número 4°, el cual estableció que dicho régimen, no podría extenderse más allá del 31 de Julio de 2010; excepto para aquellos trabajadores que estando en dicho régimen, tuvieran cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del citado Acto Legislativo, esto es, el 29 de Julio de 2005, a los cuales se les mantendrían dichas ventajas pensionales hasta el año 2014 (31 de Diciembre) .

Cuando una persona reúne las condiciones para ser beneficiaria del régimen de transición pensional, la tasa de reemplazo es uno de los aspectos pensionales a que tiene derecho conforme a su régimen (artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y, entre otras, Sentencia de Casación SL 317 de 2019).

El artículo 20 del Decreto 758 de 1990 establece una tabla porcentual de equivalencia que es directamente proporcional al número de semanas cotizadas. Para aquellos asegurados que han alcanzado un número de semanas de cotización superior a las 1,250 semanas, les corresponde una tasa de reemplazo del 90%.

Caso Concreto:

Sea lo primero identificar las premisas normativas bajo las cuales Colpensiones le reconoció la pensión de vejez a la demandante:

La señora MARÍA ROCÍO RESTREPO ARANGO nació el 13 de junio de 1948, contando con más de 35 años de edad al 1º de abril de 1994, y un total de 1,625 semanas cotizadas al 31 de julio de 2003. El entonces Instituto de los Seguros Sociales, a través de la Resolución Nro. 009299 de 2003 (fl. 10) le reconoció la pensión de vejez desde el 1º de septiembre de 2003, en cuantía de \$365.526, como resultado de tener en cuenta un IBL de \$430.031 (no controvertido), al que aplicó una tasa de reemplazo del 85%. Dicho reconocimiento tuvo como fuente legal la Ley 797 de 2003.

Los razonamientos del juez de primera instancia a partir de los cuales encontró procedente aplicar la tasa de reemplazo del 90% sobre el IBL de \$430.031, son completamente acertados, en tanto no existe ninguna duda que la señora RESTREPO ARANGO es beneficiaria del régimen de transición pensional y le asiste derecho a que se le aplique el monto máximo del Decreto 758 de 1990 (90%), al tener reunidas a julio de 2003 una densidad superior a las 1,250 semanas (cuenta con 1,625). Es importante que se tenga en cuenta que a la actora le bastaba, para ser beneficiaria del régimen de transición pensional, contar con más de 35 años de edad al 1º de abril de 1994, en tanto no le era exigible la condición de conservación del régimen de transición

conforme a los dictados del Acto Legislativo 01 de 2005, ya que consolidó sus derechos con anterioridad a la reforma constitucional.

Los argumentos de la apoderada judicial de COLPENSIONES en el recurso de alzada y que reiteró mediante los alegatos de conclusión en esta instancia, no están llamados a prosperar, ya que de ninguna manera puede entenderse que sea más favorable una tasa de reemplazo del 85% que una del 90% sobre el IBL, como la entidad lo concluyó en la Resolución SUB 255.351 del 27 de septiembre de 2018.

Con relación a la fecha a partir de la cual el A quo reconoció el derecho a la reliquidación pensional por monto, este colegiado encuentra ajustado a derecho que se haya reconocido el retroactivo pensional resultante del reajuste a partir del 15 de agosto de 2015, ya que la aplicación de la regla trienal de prescripción que realizó el juez de primera instancia, es acertada. En efecto, contabilizó los 3 años desde la reclamación administrativa elevada el 14 de agosto de 2018 y declaró afectado por el fenómeno extintivo cualquier derecho por mayor valor pensional que se hubiere causado con anterioridad al 15 de agosto de 2015.

En punto al valor reconocido en la sentencia, que ascendió a la suma de **\$2.568.204**, como reajuste comprendido entre el 15 de agosto de 2015 y el 29 de febrero de 2020, el mismo es correcto, ya que partió de la diferencia inicial entre las mesadas pensionales para el año **2015** por valor mensual de \$35.569; que para el año **2016**, equivalió a diferencia de \$38.028; en el año **2017** fue de \$40.160; en **2018** de \$41.803; **2019** de \$43.133, y; **2020** de \$44.772.

Tales diferencias generaron un mayor valor en favor de la demandante por dichos años, los cuales el A quo calculó correctamente para arribar al guarismo de \$2.568.204, como valor a pagar por reliquidación, no afectado por prescripción, hasta febrero de 2020.

Se advierte que el juez de primera instancia facultó a COLPENSIONES para realizar los descuentos en salud sobre el retroactivo por reliquidación reconocido.

Ahora, el A quo ordenó a Colpensiones continuar pagando a la demandante una mesada pensional por valor de **\$806.192** a partir de marzo de 2020, lo cual en principio corresponde con la aplicación de los IPC históricos desde el año 2003 hasta el año 2019, sobre la mesada calculada con una tasa de reemplazo del 90% sobre el IBL de \$430.031.

Sin embargo, y aunque ello no fue aspecto de apelación por la activa, pasó por alto el A quo, que el resultado de la reliquidación pensional lo llevó a obtener una mesada pensional para el año 2020 que resulta inferior al mínimo legal mensual para esta anualidad, en tanto ordenó que se continúe pagando un guarismo de \$806.192 desde marzo de 2020, y el mínimo para esta anualidad asciende a la suma de \$877.803. Ello se explica desde el punto de vista contable, al haber aplicado los IPC históricos, que representan un valor inferior al aumento que año a año ha tenido el salario mínimo legal mensual vigente.

Este colegiado no realizará ningún pronunciamiento sobre el retroactivo por reliquidación pensional ordenado en primera instancia, ya que –se reitera- este aspecto no fue recurrido por la activa-, sin embargo, no puede esta sala pasar por alto que la mesada pensional que el A quo ordenó continuar pagando a la demandante a partir de marzo de 2020 es inferior al salario mínimo, lo cual va en contravía del artículo 35 de La ley 100 de 1993, que a su vez desarrolla el artículo 48 de la Constitución Política, que establece que *“ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente”*.

En consecuencia, si bien esta sala **confirmará** la decisión de primer grado en cuanto a la reliquidación reconocida, **modificará** el numeral 2º de la parte resolutive de la sentencia, en cuanto ordenó a COLPENSIONES continuar pagando a la señora MARÍA ROCÍO RESTREPO ARANGO una mesada pensional inferior al salario mínimo desde marzo de 2020, para en su lugar, ORDENAR a COLPENSIONES que a partir de dicha fecha le reconozca a la demandante una mesada pensional por valor de salario mínimo legal mensual vigente (\$877.806), sin perjuicio de que si le viene reconociendo una mesada pensional superior a dicha suma, continúe pagándosela.

En esta instancia se condenará en costas procesales a COLPENSIONES y en favor de la señora MARÍA ROCÍO RESTREPO ARANGO, dentro de las cuales se fija, como agencias en derecho, la suma de un salario mínimo legal mensual vigente para 2021, por haber resultado la demandada vencida en el recurso.

Sin más asuntos que resolver, pasa la Sala a proferir la decisión de segunda instancia.

VIII. - DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral 2º de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, de fecha y procedencia conocida que se conoce en Apelación, en cuanto ordenó a COLPENSIONES continuar pagando a la señora **MARÍA ROCÍO RESTREPO ARANGO** una mesada pensional inferior al salario mínimo desde marzo de 2020, para en su lugar, **ORDENAR** a COLPENSIONES que a partir de dicha fecha le reconozca a la demandante una mesada pensional por valor de salario mínimo legal mensual vigente (\$877.806), sin perjuicio de que si le viene reconociendo una mesada pensional superior a dicha suma, continúe pagándosela, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR dicha sentencia en todo lo demás, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: CONDENAR a **COLPENSIONES** a pagar a la señora **MARÍA ROCÍO RESTREPO ARANGO** las costas procesales de segunda instancia, en la suma de 1 SMLMV para 2021, de conformidad a lo expuesto.

CUARTO: En su debida oportunidad, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

QUINTO: SE ORDENA la notificación por estados de esta providencia, y se autoriza su reproducción virtual a las partes del proceso.

Los Magistrados:


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 125 del 19 de julio de 2021.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>